

SENTENCIA



PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Jorge Hernán Buitrago Salazar
DEMANDADO	Angel B y CIA ACP Colpensiones E.I.C.E.
RADICADO	05-001-31-05-016-2017-00858-02
TEMA	Contrato realidad –pago de cotizaciones a la seguridad social
DECISIÓN	Confirma sentencia

El quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el **ACTA 104** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **JORGE HERNÁN BUITRAGO SALAZAR** contra **ÁNGEL B Y CIA. Y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES E.I.C.E.**, con radicado **05-001-31-05-016-2017-00858-02**.

• **PRETENSIONES:**

Aspira el demandante se declare que la sociedad **ANGEL B Y CIA S. EN C.** hoy **ANGEL B S.A.**, debe reconocer a favor del actor los aportes a la seguridad social por el tiempo entre el 1 de enero 1981 hasta el 30 de abril de 2004, con un salario de gerente **TECNICENTRO SAN JUAN** y que la **Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones** debe recibir los respectivos aportes. Como consecuencia, se condene a pagar las cotizaciones por el periodo indicado debidamente indexadas o el bono pensional, los intereses moratorios debidos desde el momento en que

hicieron exigibles; en subsidio se condene a la sociedad demandada a pagar la indemnización de perjuicios causados por la falta de aportes a la seguridad social. Lo que ultra y extrapetita resulte probado y costas procesales.

- **HECHOS:**

Las anteriores pretensiones las fundamenta el demandante en los hechos siguientes, los cuales se transcriben de manera literal, incluidos posibles errores:

“1. - El señor **JORGE HERMAN BUITRAGO SALAZAR**, nació el 24 de Septiembre de 1961, a la fecha tiene 55 años de edad. De conformidad con la cedula de ciudadanía que se adjunta, por ende beneficiario del principio de proporcionalidad y el derecho irrenunciable a la seguridad social.

2. - El señor **JORGE HERMAN BUITRAGO SALAZAR**, laboro mediante contrato individual de trabajo para la sociedad **ANGEL B Y CIA S. en C**, representada legalmente por el señor **JUAN DAVID ANGEL BOTERO**, socio gestor y mayoritario de la misma, identificado con la cedula de ciudadanía numero 70.548.602, con domicilio principal en Medellín, desempeñándose como Gerente de Tecnicentro San Juan desde Enero 1 de 1981 hasta el 30 de abril de 2004, siendo su último salario mensual la suma de (\$8,000,000,00) Ocho Millones de Pesos Mlc,

3. - El empleador **ANGEL B Y CIA S. EN C**, representada legalmente por el señor **JUAN DAVID ANGEL BOTERO**, bajo la figura del despido indirecto o auto despido prescindió de los servicios laborales del señor **JORGE HERMAN BUITRAGO SALAZAR** el día 30 de abril de 2004.

4. - El empleador **ANGEL B Y CIA S. EN C.**, representada legalmente por el señor **JUAN DAVID ANGEL BOTERO** cotizaciones pensionales en valor real del trabajador **JORGE HERMAN BUITRAGO SALAZAR**, privándole de su derecho a pensionarse dignamente ante el ISS hoy **COLPENSIONES**.

5. - El señor **JORGE HERMAN BUITRAGO SALAZAR**, reclame verbalmente los aportes no pagados a la seguridad social por el tiempo laborado al señor **JUAN DAVID ANGEL BOTERO** representante legal y socio de **ANGEL B Y**

CIA S. EN C., quien le respondió con evasivas y posteriormente no le contesto más el teléfono. No obteniendo respuesta del mismo.

6. EI INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES al encontrarse en mora los empleadores **ANGEL B Y CIA S. EN C.** del demandante, no inicio la acción de cobro coactivo para recuperar los aportes de seguridad social de conformidad con la ley artículos 53 y 57 de la ley 100 de 1993. esto hace no pueda alegar su negligencia en beneficio propio y traslade la responsabilidad a mi mandante, que siempre cumplió con sus deberes de aporte, pues siempre se le descontó de su salario para pensión, así lo dijo la Corte Constitucional en Sentencia C-106 de 2006 M. P. Jaime Córdoba Triviño.

- **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:**

Angel B S.A.: se opuso a la prosperidad de la totalidad de las pretensiones al indicar que con el demandante no existió una relación laboral regida por un contrato de trabajo, toda vez que con este lo que en realidad existió fue una relación contractual de carácter comercial (mandato). Como excepciones de fondo propuso las que denominó: inexistencia de la obligación, pretensiones conciliadas, cosa juzgada, obligaciones a cargo del ISS hoy Colpensiones.

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones: se opuso a la prosperidad de la totalidad de las pretensiones por carecer de sustento jurídico y fáctico. Sobre los hechos indica que no le constan los mismos sin embargo se adhiera a lo que resulte probado. Como excepciones de fondo propuso las que denominó: falte de legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido, buena fe, prescripción y la genérica.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 30 de octubre de 2020, el Juzgado Decimosexto Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la demandada de la totalidad de las pretensiones, al considerar que no se demostró la existencia de un contrato de trabajo. No impuso condena alguna por costas procesales.

• **APELACIÓN PARTE DEMANDANTE:**

“El despacho está desconociendo al demandante los derechos a la seguridad social protegidos fundamentalmente en la constitución política, es tan alejada de la realidad la posición del despacho que llego a afirmar en la fundamentación del proyecto de sentencia, que se presume que el demandante era accionista o copropietario de la empresa demandada, lo que absolutamente descabellado.

1.- Del mismo testimonio del testigo y del demandante bajo la gravedad del juramento se aseveró y comprobó que al empezar la vinculación laboral en enero de 1981 del señor Buitrago Salazar con Ángel B y CIA S en Comandita, que ese era la razón social de la entidad demandada como se comprueba con la documentación allegada a la demanda, el socio gestor y mayor accionista era el señor Juan David Ángel Isaza, el jefe inmediato del demandante y de quien recibía órdenes directas y dependía de sus instrucciones, nada tiene que ver que la sociedad se halla convertido posteriormente a sociedad anónima respecto a la calidad de empleador con el demandante como trabajador.

2.- Aduce el despacho que no se cumplen los requisitos del artículo 23 del código sustantivo de trabajo, respecto al salario como retribución y que la actividad personal del trabajador, otra incongruencia del juzgador dado que del testimonio del señor Atehortúa y del testimonio del demandante se afirma que al señor Buitrago se le pagaba muchas veces en efectivo con recibos de caja y otras veces se pagaban las tarjetas de crédito con que sufragaba sus necesidades congruas, la forma de salario es amplia en Colombia y de este concepto la corte suprema de justicia se ha pronunciado las diferentes tipos de salario en dinero y especie, también se colige claramente que el demandante al ser empleado de alta confianza, en razón de su cargo desempeñado como gerente de la empresa, estaba en constante actividad laboral, entrando y saliendo de las instalaciones de la empresa, visitando clientes potenciales etc, mostrando resultados operativos al negocio encomendado. O sea que no es cierto lo aseverado por el juzgador que no se cumplen los requisitos del artículo 23 CST, si no por el contrario, había subordinación directa a los socios de la empresa familiar, en especial al señor Juan David Ángel, Socio gestor, conforme al artículo 323 del código de comercio, interrogatorio que se le solicitó al despacho para que se llamara a declarar y corroborar lo afirmado, y el despacho no lo decreto violando abiertamente el derecho de defensa y debido proceso, de mi poderdante pues solo llamo a interrogatorio al presunto último representante legal de la empresa demandada, persona quien no conocía a mi poderdante, quien ya había salido de la empresa cuando fue nombrada muchos años después. Y nunca tuvieron ninguna relación laboral, por ende, absolutamente inconducente. Se comprobó el salario pagado de diferentes formas efectivo, tarjetas de crédito, etc. Y la actividad personal del demandante en su calidad del cargo de dirección y confianza con los accionistas de la empresa.

3.- Adujo también el despacho, que el demandante debía preocuparse del pago de su seguridad social, no la empresa, aseveración ilógica sin fundamento legal, toda vez que los pagos correspondientes a la seguridad social, están a cargo del departamento de contabilidad y nómina de la empresa demandada Angel B y Cia S. en C. no del gerente, pues estas no eran sus funciones. y Buitrago era un empleado

más, que rendía cuentas a la junta de socios; aun en el hipotético caso que la vinculación no fuera laboral sino contractual, se denotaría la absoluta irresponsabilidad de la empresa Angel B y cia S. en C. al no exigir la vinculación a la seguridad social integral y en especial a riesgos profesionales al gerente de la empresa, pues este desempeñaba diferentes trabajos de apoyo y ayuda en las áreas de la empresa, inclusive en el taller mecánico, con alto riesgo de sufrir un accidente laboral sin estar asegurado y cobijado por EPS y ARL, Contradiendo la normatividad obligatoria de la ley 100 de 1993, y el Artículo 3o de la Ley 797 de 2003, modificadorio del Artículo 15 de la Ley 100 de 1993

4.- Otra incoherencia se presenta, al analizar la certificación de Colpensiones, donde se aprecia la vinculación del demandante Buitrago Salazar como cotizante dependiente de Ángel B y Cia Sociedad en Comandita, desde mayo 19 de 1986 y las declaraciones de la representante legal y los testigos que trajeron a declarar, donde se comprobó que el demandante estuvo vinculado con Ángel B y Cia, desde el año 1981 hasta el año 2004, esta afirmación no fue desvirtuada ni desmentida por los demandados, entonces se reputa claramente que.

4.1. los extremos laborales iniciaron en el año 1981 hasta el año 2004,

4.2. la empresa no lo afilió a la seguridad social hasta el 1986 dejando de pagar en 1987, sin que el demandante se percatara de ello, ya que como afirmó en su declaración estaba convencido que la empresa le estaba cotizando a la seguridad social y en especial a pensiones.

4.3. El trabajador demandante continuo ininterrumpidamente desempeñando las mismas funciones laborales de gerente sin estar vinculado a la seguridad social ni exigirle la empresa esta afiliación como lo exige la ley.

5.- El despacho está desconociendo el derecho al indubio pro operario, el mínimo de derechos y garantías del artículo 13, del artículo 19 y del artículo 21 del código sustantivo de trabajo que cobijan al demandante, toda vez que como se afirmó ampliamente durante el transcurso del proceso, no hay prueba física del contrato laboral, dado que la empresa nunca se lo dio a este y en los archivos de la empresa supuestamente tampoco lo tenían; sin embargo si aseveraron la relación del demandante con Angel B y Cia S en Comandita, desde el año 1981, la prueba esta la vinculación como empleado en el año 1986 a Colpensiones, por ende se presume cierta la relación laboral, es inconcebible que el juez laboral este desconociendo los derechos y garantías constitucionales y legales del trabajador y las disposiciones internacionales de la OIT, dándole la razón a la empresa demandada ante la duda probable.

De lo anteriormente sustentado, solicito respetuosamente al despacho del tribunal superior de Medellín sal laboral actuando en apelación, revoque totalmente la decisión del juzgado dieciséis laboral del circuito de oralidad Medellín, condenado a la entidad demandada al pago de la pensión sanción y el reconocimiento de las demás pretensiones de la demanda, perjuicios ocasionados interés de mora del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y la condena en costas y agencias en derecho.

- **ALEGATOS:**

Demandante: Indica el apoderado que, “el despacho está desconociendo al demandante el derecho a la seguridad social protegidos en la constitución política

*como Derechos fundamentales artículo 48 y 53, con una posición a mi juicio, alejada de la realidad frente a la condición de Trabajador Demandante desconociendo los principios generales del Código Sustantivo de Trabajo, contemplados en los artículos 1, 9, 11 y 13, el Juez Laboral del circuito de Medellín conocedor en primera instancia **llegó a afirmar en la fundamentación del proyecto de sentencia, que se presume que el demandante era accionista o copropietario de la empresa demandada.***

Manifiesta también que, “el despacho está desconociendo el derecho al indubio pro operario, el mínimo de derechos y garantías del artículo 13, del artículo 19 y del artículo 21 del código sustantivo de trabajo que cobijan al demandante, toda vez que como se afirmó ampliamente durante el trascurso del proceso, no hay prueba física del contrato laboral, dado que la empresa nunca se lo dio a este y en los archivos de la empresa supuestamente tampoco lo tenían; sin embargo si aseveraron la relación del demandante con Angel B y Cia S en C, desde el año 1981, la prueba está la vinculación como empleado en el año 1986 a Colpensiones, por ende se presume cierta la relación laboral, es inconcebible que el juez laboral este desconociendo los derechos y garantías constitucionales y legales del trabajador y las disposiciones internacionales de la OIT, dándole la razón a la empresa demandada ante la duda probable.”

“De lo anteriormente sustentado, solicito respetuosamente al despacho del tribunal superior de Medellín sala laboral actuando en apelación, revoque totalmente la decisión del juzgado dieciséis laboral del circuito de oralidad Medellín, condenado a la entidad demandada al pago de la pensión sanción y el reconocimiento de las demás pretensiones de la demanda, perjuicios ocasionados interés de mora del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y la condena en costas y agencias en derecho”

Demandada Colpensiones: Indica la apoderada que, “Sea lo primero solicitarle al despacho de manera respetuosa, acoger la sentencia proferida por el juzgado 16 laboral del circuito de Medellín el 30 de octubre de 2020, en donde de absuelve a la entidad que represento de cada una de las pretensiones incoadas por el señor Jorge Hernán Buitrago Salazar.

Respecto a las pretensiones incoadas en la demanda, con respecto a la solicitud de pago de las cotizaciones al sistema integral de seguridad social no cancelados por la Sociedad ANGEL B Y CIA S. EN C., resulta pertinente resaltar que las mismas van dirigidas a una persona distinta a Colpensiones y sobre las cuales no tiene ningún tipo de injerencia, por lo tanto, nos encontramos frente a una Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva”

CONSIDERACIONES:

El problema jurídico para resolver por esta Sala del Tribunal se circunscribe en determinar si se encuentra demostrado o no que el demandante estuvo unido con la demandada a través de un contrato de trabajo desde el 1 de enero de 1981 hasta el 30 de abril de 2004. En caso de haber lugar a ello, se

resolverá acerca del pago de las cotizaciones a la seguridad social por este tiempo ante la ACP Colpensiones.

Conforme a los principios que informan la carga de la prueba, incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o esta (Código Civil, artículo 1757) e incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (Código General del Proceso, artículo 167, inciso 1°). Los postulados anteriores aplicados a un proceso ordinario significan que al demandante le corresponde demostrar el contrato de trabajo, la remuneración convenida, el despido y los extremos temporales de la mencionada relación de trabajo, entre otros.

De conformidad con el artículo 24 del Código del Trabajo, se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.

La presunción anterior es de carácter legal y se interpreta de la siguiente manera: cuando el demandante aduce que estuvo vinculado por un contrato de trabajo, le compete demostrar la prestación personal del servicio y el salario percibido y **de inmediato se presume la subordinación jurídica**; empero, el empleador **puede destruir tal presunción probando que la misma no existió**, porque se trató de una relación jurídica distinta a la laboral.

Al respecto debe indicarse que no existe una fórmula taxativa para establecer la existencia de la subordinación, pero si diferentes criterios o indicios a partir de los cuales se pueden fundar diferencias, debiéndose consultar aspectos como: *i)* la forma de determinar el trabajo, *ii)* el tiempo y condiciones de trabajo, *iii)* la forma en que se efectúa el pago, *iv)* la supervisión y control disciplinario, *v)* la propiedad de los medios de producción, y *vi)* la asunción de las ganancias y pérdidas, puesto que mientras en el trabajo independiente estos atributos se predicán de una persona, en el asociado se predicán de una colectividad.

De igual forma, el concepto de subordinación es explicado por el legislador, como la facultad que tiene el empleador de exigir al trabajador el

cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos. Esta prerrogativa debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. En palabras de la Corte Suprema, Sala Laboral, la subordinación es el elemento diferenciador entre el contrato de trabajo y otros acuerdos convencionales, por cuanto en el primero el empleador determina elementos como: la jornada de trabajo, el salario e imparte órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.

Insiste el demandante que laboró al servicio de la demandada a través de un contrato de trabajo del desde el 1 de enero de 1981 hasta el 30 de abril de 2004; por su parte la demandada alega que con el demandado no lo unió contrato laboral alguno, toda vez que entre ambos solo existieron contratos de carácter comercial.

Lo primero que se hace necesario advertir, es que el interrogatorio de parte es procedente en la medida en que sea idóneo para provocar confesión, por lo que no pueden tenerse probadas, por sí solas, las afirmaciones realizadas por la representante legal de la accionada y el demandante, salvo las que por confesión pueden advertir alguna situación desfavorable para ésta, conforme lo dispuesto por el artículo 191 del Código General del Proceso. De igual forma, existe un principio general, el cual expresa que la prueba no puede ser creada por quien la invoca.

En el caso concreto acepta la demandada que el señor Jorge Hernán Buitrago Salazar prestó servicio en Ángel B, pero no fue por medio de un contrato de trabajo, que él era el gerente de la compañía y era autónomo en sus funciones, él era libre y autónomo para manejar su horario, no estaba afiliado a la seguridad social porque no tenía contrato, él fue representante legal de la sociedad.

Por su parte el demandante afirma que fue representante legal de la sociedad demandada entre el 1994 hasta el año 2004, yo no realicé los pagos a la seguridad social porque siempre le decía a Juan quien era mi jefe inmediato desde el principio desde el año 82 hasta el 86 y a mí me pagaban a cuenta de socios, yo sé que era un obligación afiliarme a la seguridad

social por ser el gerente, nos informa el demandante que hizo una conciliación con la sociedad demandada la cual fue aportada al proceso, pag. 118 - 120.

Sobre la prueba testimonial tenemos que ambos testigos al unísono indicaron que no saben qué clase de contrato tenía el demandante, que tenía el cargo de gerente y que no le pagaban por nómina salarios, que tenía una cuenta corriente y se le daba plata en el momento que él lo necesitaba, como si fuera un socio, que así se le pagaba o daba dinero a los socios, afirman además los testigos que el demandante no tenía un horario establecido, que muchas veces lo veían que ingresaba alrededor de las 10 de la mañana y salía después de las 7, pero que otras veces lo veían que madrugaba y salía alrededor de las 2 ó 3 de la tarde; los testigos afirmaron que el actor no fue afiliado a la seguridad social y en especial el testigo Carlos Eduardo Atehortúa afirma que el actor tenía el conocimiento de esta situación.

Ahora bien, con relación a los elementos del contrato de trabajo, se debe partir con el relacionado con la prestación personal del servicio. Efectivamente este elemento se encuentra configurado, toda vez que, tal y como lo reconoció la demandada, el actor prestó sus servicios como gerente y representante legal de la sociedad.

No obstante, el servicio que prestó el actor a favor de la demandada no fue a través de un contrato de trabajo, pues tal y como lo señaló el a quo, el demandante confesó en el interrogatorio de parte que *“tenía la potestad y obligación de realizar las cotizaciones a la seguridad social de él mismo y de todos los trabajadores de la empresa”*, indicó el actor además que *“Juan David Ángel era su superior jerárquico”*, pero el señor Ángel según la prueba recaudada era un socio más de la empresa, de lo anterior, no se logra demostrar que el demandante fuera subordinado o que recibiera órdenes, al contrario se demuestra que tenía total autonomía para tomar decisiones, entre estas el pago a las cotizaciones a la seguridad social que se reclama, tampoco se demostró los extremos de la supuesta relación laboral, ni los requisitos para entender que había una subordinación, no tenía un horario, de otro lado de la prueba testimonial traída por el propio demandante se tiene que el demandante manejaba los dineros de la empresa al punto que le

pagaban las tarjetas de crédito personales y que podía retirar de la caja menor el dinero que él requería, lo que no sucede en las empresas donde hay una subordinación, sino que existía una total autonomía, no probándose así el salario, tampoco se prueba la subordinación, ni que cumpliera horario .

De otra parte, el documento que obra en la pág 118 suscrito el día 17 de septiembre del año 2004, contentivo de la conciliación que suscribieron las partes ante el Ministerio del Trabajo, en ese documento se acepta por el demandante que la relación que tuvo fue de tipo comercial o civil, que era mandatario y que en esa condición prestó los servicios, también aparece una cuenta de cobro por honorarios del año 2003 suscrita por el actor.

De acuerdo con las reglas de la sana crítica, la libre formación del convencimiento y la valoración probatoria de que trata el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el operador judicial tiene la facultad de libre apreciación y ponderación probatoria y con base en ello, inclinarse por los medios demostrativos que le merecen mayor persuasión o credibilidad, que le permiten hallar la verdad real, siempre y cuando las inferencias sean lógicas y razonables, (Ver sentencias CSJ SL2049-2018, SL1469-2021 y SL2262-2022), esta Sala concluye que si bien el actor estuvo unido con la demandada mediante un vínculo contractual, esta no se regía por un contrato de trabajo, ya que el servicio que le presentó a la empresa fue de naturaleza civil y no laboral, debido a que no hubo una subordinación frente a la prestación personal del servicio, toda vez que se tenía plena autonomía, no cumplía horario y no se demostró el pago de un salario, sin que se probare la configuración de un contrato de trabajo. En tal sentido, la sentencia absolutoria merece ser **CONFIRMADA**.

Con los argumentos anteriores esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas por la demandada.

En esta instancia no se causaron costas procesales.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

Se **CONFIRMA** íntegramente la sentencia que se revisa por vía de consulta, de fecha y procedencia conocida.

Sin costas procesales en esta instancia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Jorge Hernán Buitrago Salazar
DEMANDADO	Angel B y CIA ACP Colpensiones E.I.C.E.
RADICADO	05-001-31-05-016-2017-00858-02
DECISIÓN	Confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 14 de abril de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 14 de abril de 2023 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO